



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
15 de mayo de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de examen de la aplicación
Tercer período de sesiones
Viena, 18 a 22 de junio de 2012
Tema 2 del programa provisional*
**Examen de la aplicación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción**

Resumen

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Page</i>
I. Introducción.....	2
II. Resumen	2
Australia.....	2

* CAC/COSP/IRG/2012/1.



I. Introducción

1. El presente documento del Grupo de examen de la aplicación se publica de conformidad con el párrafo 36 de los términos de referencia del Mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (resolución 3/1 de la Conferencia de los Estados Parte, anexo).
2. En la presente nota se resumen los exámenes de los países realizados en el segundo año del primer ciclo de examen. Otros resúmenes correspondientes al mismo año de ese ciclo se publicarán en adiciones a la presente nota.

II. Resumen

Australia

Ordenamiento jurídico

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue firmada por Australia el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Parlamento el 7 de diciembre de 2005. La potestad de concertar tratados es una facultad del Poder Ejecutivo en virtud del artículo 61 de la Constitución.

Australia cuenta con un sistema federal con tres niveles de gobierno: federal, estatal y local. Australia es una democracia constitucional basada en el sistema de Westminster, sistema que brinda frenos y contrapesos para prevenir la corrupción. El examen de Australia se limitó al nivel federal.

De conformidad con la Constitución, el poder se divide entre tres ramas distintas del gobierno: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial.

Panorama del marco jurídico e institucional establecido por Australia para combatir la corrupción

Australia tiene varios organismos, entre ellos la Comisión Australiana para la Integridad de los Organismos encargados de la Aplicación de la Ley (ACLEI), la Comisión Australiana de Prevención de Delito (ACC), el Ombudsman del Commonwealth y la Policía Federal Australiana (AFP), que previenen y detectan la corrupción. El enfoque que adopta el Gobierno respecto de la corrupción se basa en la idea de que ninguna entidad debería tener la competencia exclusiva de la lucha contra la corrupción. Todos los organismos del Gobierno deben mantener planes para prevenir y denunciar la corrupción.

APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS III Y IV

Penalización y aplicación de la ley (capítulo III)

2.1.1. Principales conclusiones y observaciones

El delito de soborno; tráfico de influencias (artículos 15, 16, 18, 21)

El soborno de un funcionario público del Commonwealth es un delito penal, y comprende una amplia variedad de funcionarios públicos a nivel federal y una gama de conductas que entrañan la concesión de beneficios, la obtención de beneficios o la causa de pérdidas. También es delito que un funcionario público reciba una ventaja indebida a cambio de influencia, real o percibida, en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Australia sigue mejorando sus medidas para combatir el soborno extranjero. En 2010, las sanciones se aumentaron a un máximo de 10 años de prisión y/o una multa de 10.000 unidades de sanción (1.100.000 dólares). También se aumentó la sanción máxima para las personas jurídicas. La jurisdicción amplia se aplica tanto a la conducta en Australia como a la conducta de ciudadanos, residentes y empresas de Australia en el extranjero. Además, la definición de “funcionario público extranjero” se hace extensiva a los funcionarios designados por ley o por uso establecido. La detección de delitos de soborno extranjero se facilita en virtud de la Ley de Represión del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (2006).

Aunque el soborno pasivo por funcionarios públicos extranjeros no ha sido tipificado como delito en Australia, las leyes del país prevén el intercambio de pruebas con el gobierno del país respectivo para que el funcionario pueda ser enjuiciado en su país.

El número de casos de soborno extranjero que han llegado al sistema de justicia penal sigue siendo reducido. Australia puso de manifiesto que el soborno extranjero es una prioridad para los órganos encargados de hacer cumplir la ley, y las consultas con el sector privado confirmaron que recientemente ha aumentado la atención que se presta al soborno extranjero. Se tomó nota de esta novedad alentadora, y los progresos realizados en el ámbito del soborno extranjero se analizarán más a fondo en un examen multilateral futuro.

Si bien es cierto que la legislación sobre soborno extranjero penaliza muchas formas de pago realizado a funcionarios públicos extranjeros, existe una excepción en el caso de los pagos de facilitación efectuados para acelerar o lograr el cumplimiento de una acción gubernamental corriente por un funcionario, un partido político o un oficial de un partido extranjeros. En cambio, la ley principal sobre el soborno nacional no contiene tal excepción. No obstante el hecho de que la obligación de debida culpabilidad para establecer un delito es fundamental en el sistema jurídico de Australia, así como un elemento constitutivo del delito establecido de conformidad con el artículo 16, párrafo 1 (“*cuando se cometan intencionalmente*”) de la Convención, se observó que esta no enumera ninguna excepción en el caso de los pagos de facilitación. En consecuencia, Australia debería estudiar la posibilidad de seguir examinando sus políticas y su enfoque sobre los pagos de facilitación para poder combatir el fenómeno eficazmente. Australia informó de que actualmente se está examinando la cuestión de los pagos de facilitación.

La Ley del Código Penal (1995) está en conformidad con las prescripciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en lo relativo al tráfico de influencias, que abarca tanto la acción como la omisión.

No existe un delito específico en virtud de la Ley de Sociedades Australianas (2001) que se ocupe directamente del soborno en el sector privado, aunque algunas de las disposiciones de esa Ley podrían tener aplicación. Australia informó de que las empresas deben mantener directrices para prevenir y denunciar delitos so pena de enfrentarse a la responsabilidad empresarial por los actos de corrupción de sus empleados. La Ley de Sociedades contiene disposiciones sobre delitos basadas en principios concebidas para prevenir la mala conducta empresarial en general antes que delitos concretos como el soborno o el blanqueo de dinero.

Blanqueo del producto del delito; encubrimiento (artículos 23, 24)

Las principales disposiciones que penalizan el blanqueo del producto del delito figuran en el capítulo 400 del Código Penal. Australia tiene un régimen sólido para detectar y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El marco jurídico comprende la Ley de Represión del Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (2006), que establece unas obligaciones que supervisa y reglamenta el Centro Australiano de Notificación y Análisis de Transacciones (AUSTRAC).

En 2010, Australia introdujo modificaciones legislativas de las disposiciones sobre los delitos de blanqueo de dinero para aumentar su eficacia y ampliar la jurisdicción geográfica. Esos delitos incorporan elementos de intencionalidad, imprudencia y negligencia, que van más allá de los requisitos mínimos del artículo 23 de la Convención. Las sanciones llegan hasta un máximo de 25 años de prisión, y el tribunal también puede imponer una multa máxima de 1,65 millones de dólares a las personas físicas y de 8,25 millones de dólares a las empresas.

Además, los delitos de blanqueo de dinero se aplican al producto (es decir, el dinero o los bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito grave o muy grave -un delito castigado con pena de prisión de más de 12 meses- y a los instrumentos del delito (es decir, el dinero o los bienes utilizados para cometer o facilitar la comisión de un delito grave o muy grave). Es importante señalar que los delitos de blanqueo de dinero se aplican al producto del delito derivado de delitos graves o muy graves cometidos en el Commonwealth y de delitos graves o muy graves cometidos en el extranjero. Para proceder a la acusación de blanqueo de dinero, no es necesario que exista una condena por el delito determinante o implícito.

Todos los “delitos graves o muy graves”, es decir, los delitos con una pena mínima de prisión de 12 meses, se consideran delitos determinantes. Se observó que la gama de delitos graves o muy graves a nivel del Commonwealth abarca los delitos previstos en la Convención.

Malversación o peculado; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito (artículos 17, 19, 20, 22)

Se aplican sanciones penales a la utilización indebida de bienes públicos por funcionarios públicos de conformidad con la Ley de Gestión y Rendición de Cuentas Financieras (1997) y la Ley de Autoridades y Sociedades del Commonwealth (1997) (la Ley CAC). En el caso de las Autoridades del

Commonwealth, la Ley CAC también incluye sanciones penales cuando los funcionarios no actúan de buena fe, abusan de su cargo o de información en detrimento de la Autoridad. El Código Penal enumera delitos que guardan relación con la administración del gobierno más en general, incluido el hurto, la obtención de bienes o ventajas financieras mediante engaño, la formulación de declaraciones falsas en documentos públicos y la falta de honradez en general por parte de funcionarios públicos.

En cuanto al abuso de funciones, el Código Penal prohíbe una amplia gama de actividades, incluso cuando un funcionario actúa con el propósito de obtener fraudulentamente un beneficio personal o para un tercero o de causar fraudulentamente un perjuicio a un tercero. En algunos casos, puede incluir conductas cometidas intencionada o imprudentemente, lo que va más allá de las normas mínimas de la Convención.

Se consideró tipificar un delito de enriquecimiento ilícito durante la elaboración de disposiciones sobre patrimonio no justificado en la Ley de Modificación de la Legislación Penal (Delincuencia Grave y Organizada) (2010). Australia llegó a la conclusión de que no sería procedente introducir un delito de esa índole a causa de las preocupaciones de que pudiera interferir con la presunción de inocencia. No obstante, de conformidad con la Ley sobre el Producto del Delito (2002) (Ley POCA), el patrimonio no justificado puede ser embargado preventivamente y decomisado en actuaciones civiles. Cuando existan motivos razonables para sospechar que el patrimonio total de una persona supera el valor de la parte de ese patrimonio que se adquirió lícitamente, el tribunal puede obligar a que la persona demuestre que su patrimonio no se derivó de un delito contra una ley del Commonwealth, un delito grave o muy grave extranjero o un delito estatal con aspectos federales. Si la persona no puede demostrarlo, el tribunal puede ordenarla que entregue la proporción del patrimonio que no pueda demostrar que obtuvo lícitamente. Se observó en particular este enfoque innovador para abordar las preocupaciones sobre el patrimonio no justificado y el enriquecimiento ilícito fuera del ámbito del sistema de justicia penal. Como esas disposiciones se aplican en el contexto de los considerables medios de protección que el sistema jurídico australiano brinda al acusado, la eficacia de esas medidas será interesante para futuros exámenes.

Con respecto a la malversación o peculado en el sector privado, el artículo 596 de la Ley de Sociedades (2001) tipifica como delito el fraude cometido por los oficiales de una empresa.

Obstrucción de la justicia (artículo 25)

El Código Penal prohíbe la obstrucción de la justicia, que incluye intimidar o corromper a testigos, inducir a la prestación de falso testimonio, engañar a un testigo, impedir la comparecencia de un testigo ante el tribunal, manipular indebidamente o destruir pruebas y tratar de pervertir la justicia. Estas medidas van más allá de los criterios mínimos establecidos en la Convención.

Responsabilidad de las personas jurídicas (artículo 26)

La Ley Penal dispone que una ley del Commonwealth relativa a delitos graves o muy graves se referirá, salvo que se exprese en la misma la intención contraria, a las

personas jurídicas así como a las personas físicas. Esta disposición establece la responsabilidad de las personas jurídicas por muchos delitos, y afecta a la condena que puede imponerse a una empresa, con inclusión de sanciones penales, civiles o administrativas.

Participación y tentativa (artículo 27)

La Parte 2.4 del Código Penal hace extensiva la responsabilidad penal a la ayuda, la incitación, el asesoramiento o la facilitación de la comisión de un delito, la comisión conjunta, la comisión por delegación, la incitación y la confabulación para cometer un delito. Quien intente cometer un delito puede ser sancionado como si el delito en grado de tentativa se hubiera cometido. El artículo 11.5 de la Ley del Código Penal (1995) prohíbe que una persona se confabule con otra para cometer un delito siempre que al menos se haya realizado un acto manifiesto (que puede ser un acto en preparación de la comisión del delito).

Proceso, fallo y sanciones; cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (artículos 30, 37)

Australia cuenta con enérgicas sanciones penales, civiles y administrativas para hacer frente a los actos de corrupción, y los tribunales tienen la obligación de tener en cuenta las circunstancias del delito al determinar la condena adecuada. La inmunidad de responsabilidad penal de la Corona no abarca a los funcionarios públicos. El Departamento de la Fiscalía del Commonwealth (CDPP) está encargado de ejercer actuaciones judiciales por delitos contra las leyes del Commonwealth.

Cabe mencionar favorablemente el enfoque de Australia de que nadie es inmune a la acusación por casos de corrupción, incluidos los parlamentarios, aunque algunas restricciones probatorias previenen que las declaraciones formuladas en el Parlamento puedan ser presentadas en un proceso penal ulterior.

En cuanto a la libertad vigilada, no existe una norma escrita que exija al Ministro de Justicia tener en cuenta determinados factores al decidir la libertad condicional, pero Australia informó de que el carácter y las circunstancias del delito se tienen en cuenta al adoptar esa decisión.

El jefe de un organismo puede suspender a un funcionario del Servicio Público Australiano de sus funciones por motivo de una infracción presunta del Código de Conducta y si redundaría en el interés público o el interés del organismo. Si el empleado ha violado el Código de Conducta, podrá ser destituido. Además, la Ley Electoral del Commonwealth (1918) inhabilita a las personas que hayan sido declaradas culpables de soborno para ser diputados parlamentarios durante dos años a partir de la declaración de culpabilidad. La Constitución también inhabilita para ejercer un cargo de esa índole a toda persona que cumpla condena por cualquier delito grave o muy grave; no obstante, podrá ser nombrada cuando haya cumplido la condena.

Las personas que tengan antecedentes penales o que hayan sido declaradas culpables de un delito no están excluidas automáticamente del empleo en el Servicio Público Australiano, pero la circunstancia puede ser tenida en cuenta al adoptar una decisión sobre su empleo.

En cuanto a la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, el CDPP puede dar seguridades por escrito a una persona de que no será acusada, a reserva de las condiciones que determine la Política del Commonwealth. Al determinar la condena adecuada tras una declaración de culpabilidad, el tribunal debe tener en cuenta el grado de cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Protección de testigos y denunciantes (artículos 32, 33)

Los mecanismos australianos para proteger a las personas que presten testimonio en procedimientos judiciales no establecen ninguna distinción entre víctimas y testigos. La Ley de Protección de Testigos (1994) y el Programa Nacional de Protección de Testigos ofrecen protección y asistencia a los testigos que se haya determinado que están en situación de riesgo por la asistencia que hayan prestado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Además, la Ley de Protección de Testigos permite que los tribunales celebren procedimientos en sesión privada y supriman la publicación de las pruebas presentadas. El Código Penal faculta al tribunal para dictar mandamientos para proteger a los testigos, su identidad y sus familias.

En cuanto a la protección de los denunciantes, la Ley del Servicio Público de 1999 y la Ley del Servicio Parlamentario de 1999 disponen que nadie debe victimizar ni discriminar a un empleado del Servicio Público Australiano (APS) o del Servicio Parlamentario porque haya denunciado infracciones (o presuntas infracciones) de los Códigos de Conducta aplicables. La regla 2.4 del Reglamento del Servicio Público de 1999 exige que los jefes de organismos del APS establezcan procedimientos para ocuparse de una denuncia presentada por un empleado del APS de conformidad con la Ley del Servicio Público.

Australia informó de que actualmente se está elaborando un proyecto de ley para establecer un régimen amplio de protección de denunciantes a nivel del Commonwealth, e indicó asimismo que se estaban examinando medios para facilitar el acceso a las medidas de protección de denunciantes vigentes en virtud de la Parte 9.4AAA de la Ley de Sociedades en el caso del sector privado. Se reconoció esta evolución positiva.

Embargo preventivo, incautación y decomiso; secreto bancario (artículos 31, 40)

La Ley POCA establece un régimen civil para embargar preventivamente y decomisar el producto y los instrumentos de delitos federales graves o muy graves, delitos graves o muy graves extranjeros y delitos graves o muy graves que afecten al Commonwealth. Algunas de las medidas previstas son las siguientes:

- El decomiso del producto y los instrumentos del delito cuando una persona haya sido declarada culpable de un delito federal grave o muy grave;
- Un proceso no basado en una declaración de culpabilidad cuando el tribunal esté convencido de que a) una persona ha cometido un delito grave, o b) los bienes son producto de un delito grave o muy grave o instrumento de un delito grave;
- Mandamientos de sanción pecuniaria, que obligan a una persona a pagar una cantidad igual al beneficio derivado de un delito;

- Mandamientos sobre el producto de publicaciones, derivado de la explotación comercial de la notoriedad; y
- Mandamientos sobre patrimonio no justificado.

La Ley POCA autoriza el decomiso de los instrumentos del delito, incluso cuando no se haya dictado declaración de culpabilidad, y prevé medios para identificar y localizar los bienes, incluidos mandamientos de examen, entrega y vigilancia, y mecanismos para embargar preventivamente, inmovilizar e incautar bienes. Las partes pueden solicitar que sus bienes legítimamente adquiridos queden excluidos del embargo preventivo y el decomiso si fueron adquiridos lícitamente. De conformidad con la Ley Bancaria de 1959 y la Ley POCA, el secreto bancario no es impedimento para las investigaciones de la Policía Federal Australiana.

Prescripción; antecedentes penales (artículos 29, 41)

De conformidad con el artículo 15B de la Ley Penal, se podrá incoar una actuación judicial en cualquier momento si la pena máxima es superior a los seis meses de prisión. Podrán incoarse actuaciones judiciales contra una persona jurídica en cualquier momento si la pena máxima es una multa de más de 150 unidades de sanción. En los demás casos, la actuación judicial debe comenzar en el plazo de un año a partir de la comisión del delito.

Los tribunales australianos tienen en cuenta las sentencias condenatorias similares que se hayan dictado en otros países al condenar a una persona por un delito.

Jurisdicción (artículo 42)

Por lo que se refiere a la mayoría de actos de corrupción, se establece jurisdicción respecto de los actos cometidos totalmente o en parte en el territorio de Australia, así como de los actos cometidos por nacionales, residentes y personas jurídicas en el extranjero. Concretamente, el delito de blanqueo de dinero es aplicable a la conducta que se realice en Australia, el producto o los instrumentos del delito relacionados con delitos graves o muy graves, la conducta de ciudadanos, residentes y personas jurídicas, y los delitos accesorios relacionados con delitos principales cometidos en Australia.

Consecuencias de los actos de corrupción; indemnización por daños y perjuicios (artículos 34, 35)

Australia cuenta con medidas correctivas para hacer frente a la corrupción, incluidas sanciones penales, civiles y administrativas. Además, el ordenamiento jurídico australiano prevé que las personas físicas y jurídicas puedan reclamar indemnización por daños mediante procedimientos civiles, incluida la responsabilidad civil, la responsabilidad contractual u otros principios del *common law*. Además, Australia procura velar por que las consecuencias para los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción sean graves, incluido el posible decomiso de la contribución del sector público a la caja de pensiones del funcionario declarado culpable.

Autoridades especializadas y coordinación interinstitucional (artículos 36, 38, 39)

Australia aplica un enfoque multiinstitucional a la corrupción en el que participan muchos organismos del Commonwealth. Se observó el proceso que lleva a cabo Australia para elaborar un plan de acción nacional amplio contra la corrupción.

Australia cuenta con un sistema eficaz para coordinar e intercambiar inteligencia entre las instituciones de lucha contra la corrupción. La Comisión Australiana para la Integridad de los Organismos encargados de la Aplicación de la Ley, recientemente creada, que es una institución principal de lucha contra la corrupción, ha demostrado un importante enfoque proactivo para combatir la corrupción. A continuación se describe esa institución y otras instituciones competentes.

Comisión Australiana para la Integridad de los Organismos encargados de la Aplicación de la Ley (ACLEI): En 2006, la *Ley del Comisionado para la Integridad de los Organismos encargados de la Aplicación de la Ley de 2006* (Ley LEIC) estableció un nuevo cargo independiente de Comisionado para la Integridad, apoyado por la ACLEI. El Comisionado para la Integridad tiene competencia para investigar las actividades de la AFP, la ACC y, desde el 1 de enero de 2011, El Servicio Australiano de Aduanas y Protección de Fronteras. La Ley LEIC prevé medidas para mantener la integridad de la ACLEI y velar por que permanezca libre de injerencias políticas.

Policía Federal Australiana (AFP): Los organismos del Commonwealth están obligados a remitir a la AFP todos los asuntos de fraude grave y complejo, soborno y corrupción contra el Commonwealth.

Comisión Australiana de Prevención de Delito (ACC): La ACC es el organismo nacional de inteligencia criminal de Australia con facultades exclusivas de investigación. La ACC lleva a cabo operaciones e investigaciones especiales contra las principales amenazas para Australia y la delincuencia organizada en el país.

Comisión del Servicio Público Australiano (APS): Entre las funciones del Comisionado del Servicio Público figura la promoción de los valores y el Código de Conducta del APS. El Comisionado puede indagar sobre alegaciones de infracciones del Código de Conducta del APS por jefes de organismos y comunicar sus conclusiones al Ministro competente o, en el caso de los jefes de algunos organismos, a los oficiales del Parlamento. El Comisionado también tiene la obligación de evaluar la idoneidad de los sistemas para garantizar el cumplimiento del Código de Conducta del APS. El Comisionado y el Comisionado de Protección de Méritos podrán investigar denuncias en determinadas circunstancias.

El Ombudsman del Commonwealth: El Ombudsman es independiente e imparcial y desempeña una importante función, junto con los tribunales de justicia y los tribunales administrativos, en el examen de las medidas administrativas del Gobierno.

El sólido marco reglamentario que rige al sector privado australiano alienta la cooperación entre dicho sector y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluida la denuncia de actividades sospechosas al AUSTRAC.

Éxitos y buenas prácticas

En general, cabe destacar los éxitos y buenas prácticas siguientes en la aplicación del capítulo III de la Convención:

- La amplia jurisdicción del delito de soborno extranjero, que se aplica tanto a la conducta en Australia como a la conducta de ciudadanos, residentes y empresas en el extranjero.
- La definición de “funcionario público extranjero”, que abarca a los funcionarios designados por ley o por uso establecido.
- Los delitos de blanqueo de dinero, que incorporan elementos de intencionalidad, imprudencia y negligencia, que van más allá de los requisitos mínimos del artículo 23.
- La posición de Australia de que nadie es inmune al enjuiciamiento por casos de corrupción, incluidos los parlamentarios.
- La elaboración y ampliación del régimen federal de decomiso no basado en la declaración de culpabilidad en Australia.
- Los decididos esfuerzos de Australia por velar por que las consecuencias para los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción sean graves, incluido el posible decomiso de la contribución del sector público a la caja de pensiones del funcionario declarado culpable.

Desafíos y recomendaciones

Los siguientes pasos podrían reforzar las medidas de lucha contra la corrupción vigentes:

- Seguir examinando periódicamente las políticas y el enfoque sobre los pagos de facilitación para luchar eficazmente contra el fenómeno y seguir instando a las empresas a que prohíban o desalienten el empleo de esos pagos, incluso en los controles empresariales internos, los códigos éticos y los programas o medidas de cumplimiento.
- Estudiar la posibilidad de adoptar una política escrita sobre la libertad vigilada que exponga los factores que han de tenerse en cuenta.
- Adoptar y aplicar la legislación actualmente en proceso de examen para el establecimiento de un régimen amplio de protección de los denunciantes del sector público y facilitar el acceso a las medidas de protección de denunciantes del sector privado vigentes.
- Proseguir el proceso consultivo para elaborar un plan de acción nacional amplio contra la corrupción, que incluirá un examen de los métodos para que los sistemas de lucha contra la corrupción sean más eficaces.

Cooperación internacional (capítulo IV)

2.2.1. Conclusiones y observaciones principales

Extradición; traslado de personas condenadas a cumplir una pena; remisión de actuaciones penales (artículos 44, 45, 47)

La extradición se rige principalmente por la Ley de Extradición de 1988. El Reglamento de Extradición (Convención contra la Corrupción) (2005) facilita que Australia pueda formular solicitudes a Estados parte en la Convención y recibirlas en relación con los delitos previstos en la Convención. Aunque no existen grandes problemas para tramitar la extradición a o desde Australia, el proyecto de Ley de Enmienda de la legislación sobre extradición y asistencia recíproca en asuntos penales, que se aprobó el 29 de febrero de 2012, introducirá una serie de modificaciones en el sistema actual a fin de racionalizar y modernizar el proceso de extradición.

Australia no supedita la extradición a la existencia de un tratado bilateral, y considera que la Convención es la base de la cooperación con otros Estados parte en la Convención en materia de extradición. Australia es parte en varias convenciones multilaterales que se ocupan de la extradición y tiene 38 tratados bilaterales de extradición en vigor. Si no existe un tratado bilateral de extradición, Australia puede recibir solicitudes de extradición, siempre que el país solicitante sea considerado país de extradición en los reglamentos elaborados en virtud de la Ley de Extradición. Hasta la fecha, 31 países han sido declarados países de extradición en ausencia de un tratado bilateral de extradición.

La doble incriminación, que es un requisito previo para la extradición desde Australia, se determina en función de la conducta en la que se basa la solicitud de extradición. El delito por el que se solicita la extradición debe ser punible con una pena de prisión mínima de 12 meses, a no ser que el tratado disponga otra cosa. Si se solicita la extradición por delitos que no son “delitos extraditables”, puede procederse a una extradición accesoria si la persona da su consentimiento a la extradición.

La mayoría de las relaciones de extradición de Australia se llevan a cabo sin necesidad de que se presenten pruebas. El país solicitante presentará la documentación autenticada pertinente, como una exposición del delito y la pena aplicable, una orden de detención o certificado de declaración de culpabilidad y condena, y una declaración que exponga la conducta presunta constitutiva de delito. No es necesario presentar un expediente probatorio completo.

La extradición debe denegarse por delitos políticos, así como por delitos militares que no sean también delitos de conformidad con la legislación penal ordinaria de Australia. No se podrá denegar la extradición sobre la base de que el delito implica asuntos fiscales.

Un condenado puede solicitar cumplir su condena en su país de origen en virtud del Régimen de Traslado Internacional de Reclusos. Dicho Régimen se basa en el consentimiento y permite que los australianos encarcelados en el extranjero y los ciudadanos extranjeros encarcelados en Australia cumplan el resto de su condena en su país de origen siempre que se cumplan determinadas condiciones. Actualmente, Australia puede realizar traslados con más de 60 países de conformidad con el

Convenio sobre el traslado de personas condenadas del Consejo de Europa y varios tratados bilaterales.

En todas las etapas del examen de una solicitud de extradición se observa el debido proceso. Además, la Ley de Extradición aplica al proceso de extradición una serie de salvaguardias en materia de derechos humanos.

Australia no remite actuaciones penales. En casos de jurisdicción compartida, Australia puede extraditar a una persona y prestar asistencia judicial recíproca.

Asistencia judicial recíproca (artículo 46)

Australia es parte en numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales sobre asistencia judicial recíproca. La Ley de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales de 1987 (Ley MACMA) permite que Australia preste a otros países la más amplia medida de asistencia judicial en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales en relación con delitos previstos en la Convención. El Reglamento sobre Asistencia Recíproca en Asuntos Penales (Convención contra la Corrupción) de 2005 facilita que Australia pueda formular solicitudes de asistencia recíproca a Estados parte en la Convención y recibirlas.

El Departamento de Justicia es la autoridad central para la asistencia judicial recíproca en asuntos penales. Las solicitudes extranjeras se remiten a la Policía Federal Australiana para su ejecución.

La doble incriminación es motivo discrecional para denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca. El Ministro de Justicia puede tener en cuenta las circunstancias del caso, incluida la Convención, al adoptar una decisión de acceder o no a una solicitud de asistencia. El secreto bancario no es motivo para denegar una solicitud. Se denegarán las solicitudes cuya concesión sea perjudicial para la soberanía, la seguridad o los intereses nacionales de Australia o los intereses esenciales de un Estado o territorio. Análogamente, se denegará una solicitud si se ha formulado para enjuiciar, sancionar o causar otro perjuicio a una persona por razón de su raza, género, religión, nacionalidad u opiniones políticas.

La asistencia internacional de Australia incluye la práctica de pruebas, la localización de testigos, la entrega de documentos, la ejecución de mandamientos de registro, el suministro de material de investigaciones australianas, y la localización, inmovilización y decomiso del producto del delito.

La información relativa a asuntos penales puede transmitirse, sin necesidad de solicitudes oficiales, con carácter oficioso. El ejercicio de facultades coercitivas, como la ejecución de un mandamiento de registro, debe solicitarse por vías oficiales. Australia atenderá la solicitud de un país extranjero de mantener la confidencialidad de la información, excepto en la medida en que la divulgación de la solicitud sea necesaria en el desempeño de funciones oficiales o el Ministro de Justicia autorice la divulgación.

De conformidad con la legislación australianas, no puede obligarse a un mero sospechoso a prestar testimonio; no obstante, en esos casos, Australia entabla contacto con el país solicitante para suministrar la información necesaria.

La ley australianas cumple los criterios establecidos en el artículo 46, párrafo 27, de la Convención en relación con el salvoconducto.

El material que reciba Australia de un país extranjero a los efectos de una actuación judicial o investigación no se utilizará con ningún otro fin sin la aprobación del Ministro de Justicia. Como cuestión de práctica, Australia solicitará el consentimiento del país extranjero antes de pedir al Ministro de Justicia que apruebe la utilización del material con otros fines.

El Ministerio de Justicia establece enlaces con los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley al tramitar solicitudes de asistencia judicial recíproca. Todas las solicitudes pendientes son objeto de seguimiento en una base de datos electrónica de casos de excepcional calidad.

Por lo general, Australia sufragará los costos ordinarios y razonables que ocasione la ejecución de una solicitud, a reserva de cualesquiera acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley; investigaciones conjuntas; técnicas especiales de investigación (artículos 48, 49, 50)

A fin de fomentar la cooperación internacional, Australia cuenta con una amplia red de enlaces en materia de cumplimiento de la ley. La Policía Federal Australiana (AFP) desempeña un papel fundamental en la cooperación en materia de cumplimiento de la ley mediante la planificación operacional y el intercambio de información. La Red de funcionarios de enlace internacional de la AFP tiene oficinas en 29 países. La Red favorece la cooperación bilateral o multilateral, y coopera estrechamente con otros contrapartes en el marco de la Conferencia de Jefes de Policía de la ASEAN (ASEANAPOL), los Jefes de Policía de las Islas del Pacífico (PIPC), INTERPOL, la Conferencia de Oficinas Centrales Nacionales, el Foro de Comisarios de Policía de Australia y Nueva Zelandia, Europol y el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero. La AFP tiene acuerdos de intercambio de información con todas las fuerzas de policía de los Estados y territorios de Australia, así como con los departamentos y organismos federales y estatales encargados de hacer cumplir la ley.

La AFP goza de amplias facultades para combatir los delitos graves, incluida la corrupción, y tiene amplios poderes para llevar a cabo operaciones encubiertas y controladas.

2.2.2. Éxitos y buenas prácticas

En general, cabe destacar los éxitos y buenas prácticas siguientes en la aplicación del capítulo IV de la Convención:

- Las excelentes medidas de cooperación de la AFP tanto en el plano nacional como en el internacional, y su experiencia en la detección e investigación de la corrupción, que podrían ayudar a sus contrapartes extranjeros encargados de hacer cumplir la ley.
- La existencia de una extensa serie de instrumentos de investigación para combatir la corrupción en Australia.
- La gran calidad de las bases de datos para dar seguimiento a asuntos de extradición y asistencia judicial recíproca.

2.2.3. Desafíos y recomendaciones

Los siguientes pasos podrían reforzar las medidas de lucha contra la corrupción vigentes:

- Seguir examinando periódicamente las políticas y los mecanismos jurídicos para prestar la más amplia asistencia judicial recíproca, incluida la toma de declaraciones de sospechosos o acusados, en investigaciones, procesos y actuaciones judiciales.

NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Australia no ha indicado ninguna necesidad de asistencia técnica en esta ocasión.
